

MÉXICO: LOS RETOS DE UN TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA

MSc. Allan Abarca Rodríguez;
Prof. Escuela de Ciencias Políticas, UCR

Amparados en la historia reciente, la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las votaciones de julio del 2000 es quizás el evento político e histórico más importante de inicios de siglo. En el enjambre de la teoría democrática representa un hito de incalculables dimensiones, acaso el más relevante para América Latina en la última década.

Cuando a la democratización se refiere, es válido y pertinente preguntarse: ¿Cómo y cuánto puede avanzar en democracia la instauración de la alternancia en una nación en donde ha dominado un sólo partido político por más de siete décadas en el poder?; ¿hasta dónde se puede contribuir a un remozamiento del régimen político cuando los vestigios del anterior régimen dominan las prácticas políticas y burocráticas?; ¿cómo renovar o rearticular las reglas e instituciones de gobierno si los equilibrios entre actores políticos y civiles se caracterizan de inestables?

En las inconclusas discusiones acerca del carácter democrático de un régimen y de la volatilidad retórica del esquema funcional con que opera una democracia, al menos la denominada democracia política aparece como el elemento inicial para juzgar el carácter que potencialmente puede asumir un régimen cualquiera. Allí es donde, al menos a priori, alcanza suma relevancia la transición política mexicana (Valdés, 2000; p. A29); pero solamente es una de las múltiples dimensiones de la contribución al debate y enriquecimiento de la perspectiva de análisis democrática.

Un hecho ocurrido en la defensa de una tesis doctoral en España: un postulante mexicano defendía la idea de que la derrota electoral del PRI era la condición necesaria para augurar una transición democrática de su país; el resultado final de su trabajo de investigación de tesis fue rechazado bajo un cuestionamiento central: ¿Acaso puede asegurarse que toda transición desde un régimen político no democrático se proyecta a un sistema democrático?

Esa anécdota nos advierte dos cuestiones principales; en primer lugar, que todo cambio de régimen supone una reconfiguración del juego entre actores políticos, económicos y sociales; en segundo lugar, que un *proceso* democrático es precisamente eso, una dinámica continua y recreadora de libertades que -si bien reorienta las políticas públicas- no lejos se encuentra de las restricciones que le impone el antiguo régimen.

Cuando uno de los más ilustres escritores de América Latina calificó a México

como “el país de la dictadura perfecta”, de alguna manera irónica sintetizaría el andamiaje y la fachada sobre la que se levanta la arquitectura política del PRI mexicano. Si la política es también un arte, el PRI marcó una época de más de setenta años que ha matizado la manera de hacer gobierno, de hacer administración pública y de cómo se asientan allí sus gobernados. A partir de eso no es de extrañar que un alto funcionario de la última administración *priísta* calificara a esta como “la madre de todas las transiciones”.

El hecho de no haberse dado una ruptura violenta en el ejercicio del poder y más bien de operarse un tránsito pacífico en un régimen de dominio de un partido político, hace de esta transición un fenómeno aún más interesante, ya que a diferencia de la transición de otros regímenes políticos, aquí el anterior partido dominante actúa por primer vez como oposición política sin que hubiese fractura violenta y el nuevo partido gobernante lo hace sin dominio del Poder Legislativo.

Esta novedosa situación puede incluso incidir en que el nuevo Ejecutivo se inhiba de asumir una actitud denunciante ante cualquier irregularidad que se encuentre como vestigio en el ejercicio del poder. Ya de por sí, el índice de *transparencia internacional* ha situado a México normalmente dentro del tercio de países con mayor percepción de corrupción.

El PRI

La pregunta sobre el cómo algún partido político puede erigirse en el representante de toda una sociedad tiene una connotación especial en el caso mexicano. El PRI no pudo constituirse en partido único dada la bandera democrática con la que accedió al poder y por la necesidad de contar con el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, al menos en cuanto a preservar una democracia formal; el resultado fue el de una estructura formalmente plural pero de notoria connotación monopolista (Crespo, 1999; p. 229-300).

En el colapso de la hegemonía *priísta* hay que considerar que la transición fue de alguna manera pactada; no en el sentido de la firma de un convenio sino por el resultado de negociar una serie de instituciones que transformaron las bases electorales de las elecciones federales (Schedler, 1999; p. 7). A pesar de la lógica de concesiones mínimas en la que se basó las acciones del PRI, en la política de reforma institucional electoral el régimen había dado muestras de fractura, lo cual fue alimentado con elementos tales como la crisis del peso de 1994, el asesinato del candidato Luis D.

Colosio, el levantamiento en Chiapas y una cada vez más transparente, equilibrada y agresiva presencia informativa.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido arrastrado por una lenta pero incesante erosión de sus fundamentos ideológicos originales, se le ha criticado que cada vez era menos “revolucionario” y cada vez más “institucional”. Allí podemos entender cómo surge la estrategia electoral de presentarse como “*el nuevo PRI*”, es decir, cobijándose en las conquistas sociales pasadas haciéndose presentar con aparentes renovados cuadros de dirigencia de partido y de campaña política.

Por primera vez la práctica del “dedazo” (la designación del candidato del PRI como prerrogativa exclusiva del Presidente de la República) no se dio, el presidente Zedillo (1994-2000) dejó en claro su determinación de abandonar tal práctica insana que dañaba la libre competencia democrática. La batalla por la precandidatura en el PRI estuvo pletórica de ataques frontales; los precandidatos se acusaron entre sí de “corruptos”, de haber “gobernado mal” sus respectivos Estados, de “ser fracasados”; incluso el precandidato Roberto Madrazo llamó a darle un “madrazo al dedazo”, aduciendo que Francisco Labastida sí era el “designado” de Zedillo.

Los aparentes cambios partidarios terminaron por desplomarse cuando en la campaña por la presidencia el candidato Labastida, ante el eminente empate electoral que dictaban las encuestas, decide cambiar su equipo de campaña colocando en puestos claves a figuras de la vieja guardia *priísta*; lo que además de abrir un boquete de críticas respecto de la debilidad del compromiso del supuesto “nuevo PRI”, también alertó a los otros partidos sobre la posible introducción de las viejas estrategias de fraude.

Tal confrontación de líneas en el PRI arrojó un saldo favorable a lo que se denominó como “el regreso de los estrategas que sí saben como hacerlo”, o como dirían los detractores, “los mismos de siempre” (Milenio, 2000; p. 26). En esa laguna estereotipada de conquistas pasadas pero sin éxitos presentes y con una escuálida agenda de compromisos sociales naufragó la posible revalidación gubernamental del PRI.

De manera particular, el PRI afronta dos retos primordiales: en primer lugar, tras 71 años, tendrá que lidiar un sexenio sin la fuente del recurso público para ganar o mantener adeptos, lo que a la postre le puede restar mayor caudal electoral del alcanzado en las pasadas elecciones. Este aspecto resulta particularmente nefasto, máxime en un sistema político nutrido en los cacicazgos comunales y municipales.

En segundo lugar, tendrá que someterse intensamente a la revisión de la atrofiada política de renovación de cuadros dirigentes; en este sentido, la apertura del partido para reclutar nuevas generaciones de *priístas* resulta fundamental para evitar tanto la fuga de

intelectuales -quienes tradicionalmente han encontrado nichos importantes en otros partidos- como para evitar las enésimas críticas acerca de la anquilosada clase política que le conduce.

Cambio de régimen

La credibilidad fue el concepto clave que estaba en disputa en las elecciones llevadas a cabo en julio de 2000. La configuración de un Instituto Federal Electoral (IFE) como ente autónomo en la conducción de unas elecciones nacionales que pretendían ser puras y transparentes, era esencial en las nuevas reglas del juego político; a pesar de que el diseño de tal Instituto potenciaba acciones en contra del fraude, las dudas no se despejaron hasta pasadas las elecciones.

Pero el cambio de mando presidencial es resultado también de un rencor creciente de varios grupos organizados hacia la gestión *priísta*. El movimiento de Vicente Fox – candidato del PAN y actualmente presidente de México para el sexenio del 2000 al 2006- pudo aglutinar a la vez tanto a la mayoría de grandes empresarios como a los máximos intelectuales de la izquierda; quizás apoyado bajo el discurso de representar el cambio, unos y otros de diferente concepción ideológica se vieron cubiertos bajo el paraguas de un nuevo proyecto político.

La parafernalia del cambio de siglo y de milenio fue aprovechada al máximo en una escalada de mercadotecnia política que hizo lucir en Fox un candidato que aglutinaba cuatro cualidades: representar al “macho” mexicano que todo lo puede; personificar al exitoso empresario con experiencia allende las fronteras; hacer un brillante uso del lenguaje popular y por último, presentarse como la clave para un cambio necesario y oportuno.

De esta forma, “el cambio” en cuanto tal no generó “el temor a lo nuevo”, sino más bien la oportunidad de “quizás y hasta mejorar”; es en esa lógica que encuentra entendimiento la habilidad de Fox -traducida en una facilidad de comunicar sus ideas a los más amplios públicos-, de incorporar un lenguaje popular y motivador y sobre todo, que las muy normales equivocaciones e inconsistencias emanadas de su discurso pudiesen transformarlas en adeptos electorales.

Ciertamente cuando los dotes de retórica natural se conjugan con una refinada mercadotecnia, eso puede resultar suficiente para imponerse a cualquier proyecto ideológico o programático. El llamado al cambio que hizo Fox desde 1998 se conjugó con el cambio de milenio y de alguna manera se asoció también con la necesidad de

convertirse en el presidente “de la esperanza”.

Sin embargo, para el intelectual mexicano Carlos Monsiváis, el triunfo de Fox sobre el oficialista Francisco Labastida no fue el producto del “voto castigo” sino del “hartazgo”, es decir, de que los mexicanos no concebían una modernidad, un ingreso a la globalización, si es que el PRI continuaba en el poder (Monsiváis, 2000).

En este punto recordemos que la teoría de la elección racional suministra algunas pistas pertinentes para la predicción del voto popular; señala como factores claves los siguientes: las promesas sobre su bienestar (control de la inflación, salud, seguridad ciudadana), la credibilidad de los candidatos, la cantidad y tipo de información que les pueda llegar y la evaluación retrospectiva de quienes prometen. Si bien es cierto que esta teoría se aplica en regímenes de clara alternancia, Magaloni Kerpel insinúa que a mayor experiencia del individuo y mayor lejanía de hechos históricos político-ideológicos relevantes, la lealtad al voto histórico o familiar se va diluyendo (Magaloni, 1994; p. 327).

Por eso no es de extrañar que en un régimen político donde un partido político es el hegemónico pero subsisten dos partidos políticos mayoritarios adicionales, se genere el paso a la recreación de un juego en el poder que auspicia las alianzas intergrupales. En este sentido, es curioso que la estrategia planteada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como el más genuino partido de masas de la izquierda mexicana, albergaba el siguiente orden de preferencias en su lucha electoral: a) que triunfe el PRD; b) que triunfe el PAN pero sin respaldo del PRD; c) que triunfe el PAN con respaldo del PRD; d) que triunfe el PRI sin respaldo del PRD; e) que triunfe el PRI con respaldo del PRD. Así, prácticamente las dos primeras preferencias señaladas tenían un respaldo del seguidor *perredista*, no así el resto de preferencias que se visualizaban en su orden como los resultados desde los menos malos hasta los peores.

Los retos políticos del sexenio presidencial: 2000-2006

El primer reto del presente Gobierno Federal Mexicano, emana del propio andamiaje institucional o estructuración burocrática que siempre ha respondido al PRI. Ciertamente la dinámica del sector público, las reglas legales y no legales, las formales y no formales, han nacido, crecido, reproducido y anquilosado bajo la tutela de un sólo partido político; he allí un reto de incalculables proporciones: ¿cómo cambiar la forma de hacer las cosas en la administración pública después de setenta años?

Salvo algunas instituciones especializadas, el sector público mexicano ha carecido

de la configuración de un sistema de servicio civil para la contratación y capacitación de la burocracia. Paradójicamente, lo que en otros países es un problema para los partidos opositores que llegan a ser oficialistas –el cómo darle trabajo a todos los que trabajaron en campaña-, en el caso mexicano más bien hasta se le dificulta al PAN tener de dónde reclutar profesionales afiliados a su partido para todas las jefaturas o direcciones de los miles de apartamentos e instituciones que componen el gran aparato público.

Por eso no es de extrañar la insistencia del nuevo gobierno de Vicente Fox de realizar un Gobierno incluyente, ya no sólo desde un punto de vista meramente doctrinario, sino también con la participación de personas afiliadas a cualquier partido político, pero que demostrasen capacidad y honestidad en su desempeño. Es indudable que conocer los laberintos y cavernas oscuras que encierra un aparato de administración pública puede atentar contra cualquier aspiración de gobernabilidad, por eso se vuelve este el reto primordial para darle al Ejecutivo la transparencia de actos y capacidad de maniobra deseada.

Un segundo reto proviene de la capacidad del sistema político de procesar las demandas de los diversos sectores organizados, tales como empresarios, estudiantes, educadores, indígenas y campesinos, todos ellos agrupados en enésimas instancias de presión que diariamente realizan marchas, toma de oficinas, plantones (concentraciones masivas) y cada uno de ellos con sus propias agendas de asuntos particulares.

El conflicto de *Chiapas* y los movimientos armados en algunos Estados de la república mexicana, en realidad son fenómenos conflictivos que aunque han recibido un eco mayúsculo a nivel internacional y en los medios de comunicación masiva, son percibidos por la mayoría de mexicanos como “problemas muy lejanos”, esto debido tanto a las necesidades apremiantes particulares de una mayoría mexicana que habita el centro de la República como a la lejanía geográfica en que se escenifican los conflictos aludidos.

No obstante, respecto al asunto *chiapaneco*, la solución de las demandas sí le podría generar al presidente Fox dos dividendos en suma especiales: una reputación internacional importante y un respaldo de parte de los intelectuales mexicanos de izquierda que aún conservan una fuerte presencia en el universo de la opinión y movilización pública.

El tercer reto se enmarca en la relación que pueda establecer el nuevo gobierno con el PRD y el PRI. En su oportunidad Fox anunció que ocuparía en exclusiva un día a la semana para entablar conversaciones con diputados y senadores para llegar a los acuerdos que impulsen la legislación atinente a las agendas del Ejecutivo. Esa función

parece primordial ya que con la paridad de fuerzas que predomina en el Legislativo Federal y en el Senado, potencialmente se inhibiría la capacidad del Ejecutivo federal.

Pero aquí aparece otra disyuntiva, ¿cuál va a ser la dirección política que le imprima a sus reformas el Partido Acción Nacional (PAN) en el poder? Hay que recordar que el PRD se mostró altamente agresivo en contra del PAN durante la campaña política, para nadie era un secreto que si el PAN y el PRD unían sus fuerzas electorales sobrepasarían fácilmente al PRI, pero los dos proyectos políticos estaban sumamente encontrados: por su parte el PAN siempre se ha mostrado favorable a las reformas de apertura económica mientras el PRD defiende un esquema socializante o de seguridad social extendida.

Esta incompatibilidad entre PAN y PRD, a pesar de ser los dos partidos de oposición más fuertes, encubrió una manifiesta aversión del PRD a una alianza electoral: “no al cambio por el cambio”, insistió Cuauhtémoc Cárdenas candidato del PRD y haciendo referencia constante a la alianza del PAN y del PRI en las “reformas salinistas” (medidas de ajuste estructural en el Gobierno de Carlos Salinas 1988-1994).

Sin embargo, un segmento bastante importante de los creadores e intelectuales de México, siempre fieles a consignas de izquierda y de apertura democrática, se enfrentó a la siguiente encrucijada: “voto fiel” o “voto útil” (Milenio, 2000; p. 34); finalmente, la mayoría de ellos favoreció la iniciativa del voto útil, es decir, la derrota del PRI era una consigna auspiciada para alimentar la renovación institucional del país y la consecución de reformas respecto a la pureza y respeto al sufragio.

Pero ese voto por la alternancia, por el cambio institucional, era el fin último; logrado este habrá que escudriñar con suspicacia los apoyos bajo los que sustenta el nuevo gobierno federal mexicano.

El cuarto reto para el gobierno *panista* será concretar sus promesas de campaña y que estas generen el bienestar pregonado; ciertamente centrarse en campaña ofreciendo un crecimiento del PIB de un 7% anual y generar por año un millón trescientos mil empleos pudo haber seducido a un fuerte conglomerado de los más de 40 millones de pobres de esa nación.

Recordemos que México se ha puesto a la vanguardia en los tratados de libre comercio, siendo uno de los dos países en el orbe —el otro es Israel— que han firmado tratados con los dos grandes bloques comerciales: Estados Unidos-Canadá y la Unión Europea; es una de las mayores potencias turísticas mundiales; se encuentra entre las doce mayores economías del mundo; marcha a paso firme en la industrialización y goza de una clave potenciación en la infraestructura que la hace atractiva para los capitales internacionales.

No obstante, la creciente actividad de empleo informal, el impacto de capital “golondrina” que reacciona ante la fluctuación de las tasas de interés de su vecino del Norte, la galopante inseguridad ciudadana, los problemas agrarios y la exégesis de la miseria de cerca de la mitad de su población, hacen de México un país de contrastes, de ironías, allí donde se entrecruzan a las vez las esperanzas y las desesperanzas.

El quinto reto es el de las reformas políticas pendientes: la regulación al financiamiento de los partidos políticos, la política de bienestar social, la inseguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción institucionalizada en las distintas esferas de gobierno y las reformas electorales del país.

El núcleo de una democracia es la credibilidad y la credibilidad es la táctica que oxigena el juego del poder. Si el PAN hubiese perdido las elecciones, tal y como lo auguraban la mayoría de encuestas y sin embargo, hubiese denunciado fraude –tal y como amenazó con hacerlo si perdía con menos del 5%-, quizás en esta coyuntura hablaríamos de un régimen electoral colapsado, cuando en realidad sí se han dado pasos fundamentales para generar un órgano que maneje de manera independiente las elecciones: el IFE.

Una sociedad construida en la desconfianza generalizada solamente puede ser paulatinamente remozada si hay una constatación de reformas que cimienten la división, autonomía y respeto de y entre los poderes de la nación. La quiebra de un partido hegemónico en un sistema político por lo menos se traduce en que el llamado “partido invencible” –el PRI- haya aceptado una regla del juego democrático, el cual apunta a elecciones libres y es que con la simple ausencia de ese requisito cualesquiera reformas sociales difícilmente pueden por sí solas legitimar algún régimen.

La lucha democrática se materializa en dos arenas: por un lado la disputa hegemónica en la confrontación de fuerzas sociales en torno a proyectos de sociedad y de modelos de desarrollo y por otro lado, las luchas y tensiones por el uso de los recursos públicos, las prácticas políticas dominantes, en fin, por lo que tiene que ver con la regulación de los intereses y su expresión en condiciones históricas de gobernabilidad (Grzybowski, 1997; p. 13-14).

Si la reconstrucción democrática institucional inicia con la legitimidad del régimen, de la lectura política mexicana se desprende la necesidad de reconstruir el Estado en sus relaciones con la sociedad civil y el aparato productivo; allí es donde se afina la base de la reforma política. Es una realidad que el contexto institucional no deja de ser hostil al proyecto *foxista*, ante lo cual surge la interrogante: ¿Qué tanta capacidad de generar arreglos puede incentivar el nuevo gobierno? La incertidumbre como premisa que se cierne sobre el panorama político es ya de por sí un axioma en la

reconstitución de un régimen político.

Una consolidación democrática requiere neutralizar los actores eminentemente autoritarios, fomentar prácticas compatibles con la democracia en aquellos actores neutrales y que el tejido institucional sepa operar los múltiples intereses en pugna (O'Donnell, 1997; p. 224). La oportunidad del PAN es que siempre ha sabido jugar un papel averso al riesgo que lo sitúa en una perspectiva más conciliadora que conflictiva (Loeza, 2000; p. 2).

Aunque la alternancia genera más posibilidades de debate público en una sociedad, también es cierto que las perversidades del trabamamiento institucional encuentran allí su caldo de cultivo. Varias preguntas yacen en el tapete y habrá que explorarlas con agudo sentido en los próximos cinco años: ¿Cuáles serán las repercusiones del cambio político mexicano en el régimen de partidos políticos latinoamericano?; ¿Qué renovación institucional es asequible para un partido recién llegado al poder?; ¿Cómo va a repotenciar sus capacidades un partido dominante como el PRI ahora en la oposición?; ¿Qué perspectivas de democratización socioeconómica puede impulsar y lograr la democratización política?

Bibliografía consultada

- Crespo, José A. *La crisis mundial de los partidos dominantes*. En: **Metapolítica**. México. N.10, Vol. 3. 1999.
- Grzybowski, Cándido. *La presión política, la movilización social y el lobbying*. En: **Sociedad Civil**. México. N.3, Vol. 1. 1997.
- Loeza, Soledad. *Incertidumbre y riesgo en transiciones prolongadas. La experiencia mexicana y el Partido Acción Nacional*. Febrero, 2000. Documento de Trabajo. Doctorado en Ciencia Política. FLACSO, Sede Académica de México.
- Magaloni Kerpel, Beatriz. *Elección racional y voto estratégico: algunas aplicaciones para el caso mexicano*. En: **Política y Gobierno**. Vol. I, núm.2, segundo semestre de 1994. CIDE. México.
- Monsiváis, Carlos. *Hacer la ola en los funerales del PRI*. Periódico **El Universal**. 09/07/2000. México.

O'Donnell, Guillermo. **Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización.** PAIDOS. Argentina. 1997.

Revista Milenio N. 139, 8 de Mayo, 00. *¿Cárdenas o el voto útil?* México.

Andreas Schedler. *The path-dependent logic of delegation. The origins of Non-Partisan Election Management in México.* Documentos de Trabajo, Doctorado en Ciencia Política, FLACSO-México. Setiembre, 1999.

Valdés Ugalde, Francisco. *México: 2 de Julio.* Periódico **El Universal.** 09/07/2000. México. A29.